

Los dos cuerpos del rey

Santos Juliá, *El País*, 19/03/1995

Si uno de los fundamentos de la teología política medieval era el axioma de que "el rey en cuanto Rey nunca muere", el origen del que mana toda la política moderna fue, por el contrario, la muerte del Rey. El Parlamento inglés hizo rodar la cabeza de Carlos I no por el placer de matar a un rey sino para inaugurar, con la muerte del Rey, un tiempo nuevo a partir del "año primero de la libertad", del mismo modo que casi siglo y medio después la Revolución Francesa segó la vida del rey Luis XVI como parte del ritual del nacimiento de un nuevo orden político y social, y todavía un siglo más tarde los bolcheviques rusos, dubitativos acerca del destino que depararían a la familia Romanov, tomaron la suprema decisión de exterminarla como se arranca del jardín un mala planta, de raíz.

Pues si el rey nunca muere en cuanto Rey es porque tiene dos cuerpos, como recuerda Ernst Kantorowicz en el precioso libro del mismo título: inmortal, incorruptible el uno; perecedero, destinado a los gusanos el otro. Con objeto de liquidar el cuerpo inmortal del Rey, ingleses, franceses y rusos hicieron subir al cadalso o colocarse contra el paredón el cuerpo mortal de un rey. Un cadalso es, entonces, el cimiento sobre el que se basa el Estado moderno, pues el Pueblo que inaugura la nueva historia de libertad e igualdad no encuentra mejor fórmula de desacralizar el cuerpo eterno del Rey que cortar la cabeza de un rey mortal.

¡Qué ocurrencia evocar el rito primordial de la muerte del Rey como origen del tiempo de la libertad el día mismo en que una hija de rey contrae matrimonio en una ciudad tan rebotante de vida como Sevilla a mediados del mes de marzo! Pero es el caso que, en las tormentosas relaciones de amor y odio que han regido las relaciones de Pueblo y Rey en España, hemos conseguido el singular palmarés de ser el país que más reyes ha expulsado de su territorio y, a la vez, el que nunca ha conducido a un rey al cadalso: salió Fernando de España y siguió después el mismo camino su viuda, la reina María Cristina; tuvo que poner tierra por medio su hija, Isabel, aquella "señora imposible" a la que Cánovas no quería ver ni en pintura; abandonó cansado Amadeo y se marchó

Alfonso entre coplillas. ¡Viva el trono con honra! fue entre los españoles del siglo XIX y hasta 1931 un grito al que podía seguir sin solución de continuidad el de ¡Abajo los Borbones! Abajo o fuera; caídos del trono o enviados al exilio, "marchaos" o "echaos", pero nunca muertos por la mano del verdugo histórico del Rey, ese Pueblo revolucionario que pretende amasar con sus manos su propia historia.

El español es el único pueblo que, desde 1808, ha expulsado a casi todos sus reyes sin haber dado nunca muerte al Rey. La restauración monárquica quedaba siempre como una posibilidad abierta: si somos los que más tronos hemos derrocado, somos también los que más tronos hemos restaurado. Reinstaurada por última vez en 1975, y no tras la muerte de un rey sino de un dictador, la monarquía renacía así, por necesidad, demasiado humana: el rey restaurado sabía, y muchos esperaban, que en cuanto Rey podía morir. Es más, hubiera probablemente muerto si no hubiese salido a la calle en busca de lo único que podía darle, en cuanto Rey, larga vida: la aceptación y el calor popular.

"No tengo hoy el amor de mi pueblo", lamentaba el rey Alfonso el día de su marcha, como diciendo: el Pueblo, mi hijo, vuelve la espalda al Rey, su padre. El nieto de Alfonso, sin embargo, fue adoptado, en una inversión de papeles, como rey-hijo por un pueblo que nunca podrá ver en su figura el cuerpo inmortal del Rey. De ahí que sean vanos los intentos de sacralizar al rey Juan Carlos fabulando que es hijo de Rey. Ésta es una monarquía decididamente humana, hija adoptiva como es de un pueblo que la acepta. Por eso puede el pueblo sevillano festejar la boda de la hija del rey como si se tratara de la boda de su niña, cuerpo de Pueblo tanto como cuerpo de Rey.

Invención de la monarquía democrática

SANTOS JULIÁ 26/11/1995

"Sufro inmensamente por el Príncipe. Le veo y le oigo jurar lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del Movimiento, Nacional y demás leyes fundamentales del Reino", escribía Jesús Pabón al ver en diferido la proclamación de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey. El Príncipe, "firme, aplomado, garboso", pronunciaba el 23 de julio de 1969 su juramento con plena conciencia del desgarró que producía no ya a gente tan leal a la causa como Pabón, sino a su propio padre, depositario de unos derechos que los monárquicos tienen por imperecederos, pero que en España fenecieron un día de abril de 1931.

La cuestión, tal como la percibía el Príncipe, no consistía en restaurar derechos históricos, sino en asegurar el porvenir de la monarquía: "Si yo no, entonces ni tú ni yo", había hecho saber a su padre. Que la ceremonia tuviera el aire de instauración de la monarquía autoritaria le parecía un accidente desgraciado, pero secundario. No lo era, evidentemente. El cumplimiento, seis años después, de las previsiones sucesorias, dejaba a la Corona con un fuerte déficit de legitimidad en cualquiera de sus tres posibles fundamentos. El Príncipe no devenía rey por carisma, tampoco por ser heredero de una santa tradición ni por exigencias de la razón. El Príncipe se convertía en rey por voluntad de Franco, manifestada en la hiriente decisión de saltar el orden dinástico sin dejar ningún resquicio para aparentar siquiera una abdicación del padre en el hijo, como la que tendría lugar años después, cuando el hecho estaba ya consumado y su significado simbólico reducido a una cuestión de familia.

Desprovisto de legitimidad dinástica y cargado con el lastre de la dictadura, el Rey encaminó sus pasos a conquistar para la monarquía la única legitimidad posible, la que Saavedra Fajardo situaba en el "consentimiento común que da respeto a la corona y poder al cetro" y hoy definimos como razón democrática. Obligado a conquistar esa nueva legitimidad, el Rey estableció con la Corona una relación única, irrepetible. No podrá haber otro rey como don

Juan Carlos porque si "la naturaleza no hizo reyes" únicamente la corona dotada del aura de inmortalidad legitima al rey mortal; en esta ocasión, por el contrario, fue un rey mortal quien legitimó a una corona que había previamente perecido.

Pero no sólo el Rey. La ya agobiante celebración del 20 aniversario de tantas cosas ha tendido a olvidar que la democracia no ha sido una gracia otorgada. Magnífico, excelente, que tantos demócratas de la familia real y de la causa monárquica hayan laborado desde 1940 por la reconciliación nacional; estupendo que hubiera tanto jerarca del Movimiento suspirando desde 1960 por la hora en que la democracia alumbrara por fin en España.. Pero la verdad escueta es que, para que monarquía y democracia se hayan encontrado, ha tenido que transcurrir más de un siglo y medio de sangrientos desencuentros en los que invariablemente la Corona caía del peor lado. Es hora de recordar que en las grandes efemérides de la democracia española -1812, 1868/1869, 1931- el rey siempre estuvo ausente; que tan sólo en 1976/1978 han coincidido democracia y rey en España.

Es en ese histórico encuentro donde radica la legitimidad de la Corona. No estamos ante el resultado de una tradición asentada, sino ante una invención de apenas 20 años de existencia. En las fechas que conmemoramos, nosotros y el Rey inventamos una democracia coronada, una corona democrática. Nada en la naturaleza lo exigía; tampoco en la historia anterior. Más bien, si nos hubiéramos dejado llevar por lo que fuimos, monarquía y democracia habrían sucumbido en un nuevo encontronazo. De ahí, la singular exigencia de discreción que esa invención entraña para todos nosotros, desde luego, pero también para el rey que ciñe la corona, pues -como terminaba Saavedra- "al que demasadamente ensancha su circunferencia, se le cae de las sienes".

La muerte de Franco

SANTOS JULIÁ, EL PAÍS, 19/11/1995

Esta noche hará veinte años que murió el general Franco. Nada, si se cae en el fácil tópico del tango; mucho, una barbaridad, si se mide por todo lo que nos ha pasado desde entonces. Antes, hasta esa fecha, el tiempo no contaba; después, cuando los relojes volvieron a funcionar, ha corrido sin parar. En este sentido, la muerte de Franco es un acontecimiento fuerte de nuestra historia, un acontecimiento de los que marcan una divisoria en el tiempo: hay un antes y un después de la muerte de Franco. El antes está bien presente en la memoria: Franco fue el último intento de construir un Estado sobre los rescoldos siempre avivados de una guerra; un Estado que, en sus orígenes, se basó en una pasión exterminadora y, luego, hasta su fin, en una política de exclusión y represión de una parte de la sociedad española. Fiel al origen de su poder, Franco fue durante toda su vida como el compendio de una impotencia histórica para construir un Estado capaz de dar cabida a todas las voces que emanan de una sociedad plural.

Su muerte fue un acontecimiento porque nadie pudo, después de él, mantener el viejo Estado ni edificar uno nuevo sobre una estrategia de la exclusión. No pudieron los continuistas del régimen, que por unos meses soñaron a Franco vivo en sus instituciones. Creyeron contar con complicidades suficientes para mantener congelado el tiempo y lo perdieron en el retoque de lo que no tenía reforma posible, en la remodelación de un edificio declarado en ruina. Fracasaron, desde luego, como también fracasaron quienes desde la oposición pretendieron trazar en el aire una imaginaria línea de ruptura para ocupar, llevados en volandas de una movilización popular, el lugar del que durante largas décadas habían sido excluidos.

Después de Franco, ni la reforma de sus instituciones ni la revolución pendiente eran posibles. Los que venían del régimen aprendieron que todo aquel artefacto de poder debía ser desmantelado de arriba abajo, mientras la oposición aprendía -por convicción o a la fuerza- que un nuevo sistema político no se podía construir sobre la negación del pasado, como si Franco pudiera ser

borrado y fuera posible el retorno a un 14 de abril. En sólo unos meses todos aprendieron que enterrar a Franco para siempre exigía renunciar a cualquier proyecto de poder basado en la exclusión del adversario, viniera éste de las filas del régimen o procediera de las zonas más castigadas de la oposición.

La muerte de Franco abrió así uno de los momentos más originales y creadores de nuestra historia política y, simultáneamente, uno sobre los que más gravitó el recuerdo del pasado. Tan falso es que la transición se haya realizado sobre una amnesia colectiva como que no haya llegado a su meta por un exceso de memoria: si la muerte de Franco fue matriz de historia, lo fue por el doble motivo de que nadie quedó aherrojado por los juramentos de fidelidad a su obra y, a la vez, nadie pretendió disimular, hacer como si Franco jamás hubiera existido. Por eso, siendo tan radicalmente nueva, la Constitución de 1978 parece como si fuera el compendio, esta vez exitoso, de siglo y medio de historia.

¿Quiere esto decir que un resto de Franco alienta todavía, que la democracia española sufre un déficit en origen y es necesario pensar una segunda transición? No falta quien lo diga, desde el líder de la oposición, que tituló con esa irresponsable expresión una de sus más huera publicaciones, hasta quienes pretenden en el Gobierno desplazar la responsabilidad de sus actos hacia una presunta herencia recibida, por no hablar de los que fueron jerifaltes de sí mismos en la Junta Democrática. Pero los intereses inmediatos de la oposición y del Gobierno o los delirios presidenciales de los ex junteros no deben oscurecer un hecho sustancial: que Franco murió de doble muerte hace veinte años y que desde entonces el tiempo no ha dejado de correr ni nosotros de ser responsables de nuestra propia historia.